CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE LOS VALLES DEL SINÚ Y DEL SAN JORGE – CVS

RESOLUCIÓN 3-3319

FECHA: 06 DE DICIEMBRE DE 2024

"POR LA CUAL SE RESUELVE UNA INVESTIGACIÓN ADMINISTRATIVA AMBIENTAL"

EL DIRECTOR GENERAL DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE LOS VALLES DEL SINÚ Y DEL SAN JORGE CVS, EN USO DE SUS FACULTADES LEGALES Y ESTATUTARIAS, Y

CONSIDERANDO

Que la Corporación Autónoma Regional de los Valles del Sinú y del San Jorge – CVS, en cumplimiento de las funciones atribuidas por la Ley 99 de 1993, artículo 31 numeral 12 realiza funciones de control, seguimiento y evaluación ambiental de los usos del agua, el suelo, el aire y demás recursos naturales renovables existentes en el Departamento de Córdoba.

Que la mencionada ley 99 de 1993, dispone que las Corporaciones Autónomas regionales ejercerán funciones de máxima autoridad ambiental en el área de su jurisdicción, y por lo tanto, podrán imponer y ejecutar medidas de policía y las sanciones previstas en la ley en caso de violación de las normas sobre protección ambiental y manejo de los recursos naturales renovables.

Que, en acatamiento a lo anterior, profesionales adscritos a la Subdirección de Gestión Ambiental de la Corporación CVS, realizaron visita de inspección con el fin de verificar la situación presentada en el Municipio de San Antero- Córdoba, generándose el Informe de Visita ASA N° 2020-649 del 13 de noviembre de 2020.

Que la Corporación CVS mediante Auto N° 12541 del 16 de septiembre de 2021, ordenó la apertura y realizó unos requerimientos al **MUNICIPIO DE SAN ANTERO**, y a la empresa **AQUALIA LATINOAMÉRICA S.A. E.S.P.,** representada legalmente por el señor JOSÉ RAMON DIEZ.CABALLERO y/o quien haga sus veces, por presuntamente no contar con el Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos-PSMV aprobado por esta Corporación, y por no con contar con permiso de vertimientos del sistema de tratamiento y, por consiguiente, estar realizando vertimiento ilegal.

Que, por medio de oficio con radicado CVS N° 20212117140 y 20212117139, se notificó personalmente por correo electrónico el contenido del Auto N° 12541 del 16 de septiembre de 2021, al Municipio de San Antero y a la empresa Aqualia Latinoamérica en fecha 26 de noviembre de 2024.

Que, existiendo mérito suficiente para continuar con el proceso sancionatorio ambiental, por medio de Auto N° 12839 de 18 de enero de 2022 la CVS, formuló cargos contra el **MUNICIPIO DE SAN ANTERO**, y contra la empresa **AQUALIA LATINOAMÉRICA S.A. E.S.P.,** representada legalmente por el señor JOSÉ RAMON DIEZ.CABALLER y/o quien haga sus veces, por

presuntamente no contar con el Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos-PSMV aprobado por esta Corporación, y por no con contar con permiso de vertimientos del sistema de tratamiento y, por consiguiente, estar realizando vertimiento ilegal.

Que, el acto administrativo de la referencia fue notificado personalmente por medio de correo electrónico al Municipio de San Antero y la empresa Aqualia Latinoamérica S.A. E.S.P. el día 19 de enero de 2022, bajo los oficios con radicado CVS N° 20222100659 y 20222100658, respectivamente.

Que, pese a encontrarse debidamente notificados del Auto N° 12839 de 18 de enero de 2022, el Municipio de San Antero y la empresa Aqualia Latinoamérica S.A. E.S.P., no reposa en el expediente escrito de descargos.

Que mediante Auto N.º 13624 del 01 de agosto de 2022, esta Corporación, corrió traslado al **MUNICIPIO DE SAN ANTERO**, y contra la empresa **AQUALIA LATINOAMÉRICA S.A. E.S.P.,** representada legalmente por el señor JOSÉ RAMON DIEZ.CABALLER y/o quien haga sus veces, para efectos de presentar su memorial de alegatos, de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley 1437 de 2011.

Que, el acto administrativo de la referencia fue notificado personalmente por medio de correo electrónico al Municipio de San Antero y la empresa Aqualia Latinoamérica S.A. E.S.P. el día 16 de agosto de 2022, bajo los oficios con radicado CVS N° 20222112164 y 20222112163, respectivamente.

Que, por medio de oficio con radicado CVS N° 20221107976 del 24 de agosto de 2022, la empresa Aqualia Latinoamérica S.A. E.S.P., presenta dentro del término legal, escrito de alegatos al Auto N.º 13624 del 01 de agosto de 2022.

Que, a pesar de encontrarse debidamente notificados del Auto N.º 13624 del 01 de agosto de 2022, el Municipio de San Antero no presentó escrito de alegatos.

DE LOS ALEGATOS PRESENTADOS POR AQUALIA LATINOAMÉRICA S.A. E.S.P.

***"…** Ahora bien, en esta oportunidad, y con base en las pruebas aportadas y los descargos presentados dentro del término concedido, se quiere resaltar que los hechos constitutivos de presunta infracción ambiental no existen. Es decir, la empresa no ha realizado acciones u omisiones que lleven a materializar alguna infracción ambiental. En efecto, tal como se desprende de las pruebas que se aportaron, en virtud del requerimiento efectuado por la misma Corporación - CVS, resultó que el Municipio de San Antero y Aqualia Latinoamérica S.A. E.S.P. acordaron que el Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos del municipio de San Antero y la solicitud de permiso de vertimientos, que debían ser estudiados por la CVS, serían los*

presentados por el municipio y, en efecto, se está adelantando el trámite administrativo respectivo.

Sea esta la oportunidad para recordad que Aqualia Latinoamérica S.A. E.S.P., como actual operador de los servicios públicos de acueducto y alcantarillado del municipio de San Antero, inició trámites de la renovación del Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimiento - del municipio de San Antero, vigencia 2020 – 2029 ante la CVS mediante Radicado 20201109377. Sin embargo, mediante oficio del 11 de junio de 2021, con radicado 202112105404, de la Subdirección de Gestión Ambiental de la CVS y suscrito por Albeiro Arrieta López en su condición de subdirector de Gestión Ambiental, cuyo asunto es "Respuesta al radicado 20201109377: plan de saneamiento y manejo de vertimientos municipio de San Antero 2020-2029", se indicó:

"En atención al asunto, me permito informar que a la fecha la alcaldía del municipio de San Antero radicó ante esta Corporación el Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos PSMV, así como la solicitud de permiso de Vertimientos para su evaluación y aprobación.

Teniendo en cuenta que no se puede iniciar dos trámites para el mismo municipio, lo exhortamos a que se aúnen esfuerzos para presentar la documentación completa, en aras de dar cumplimiento a la normatividad ambiental vigente y un adecuado manejo a las aguas residuales del municipio.

Por lo cual, en un término no mayor a un mes calendario, comedidamente le solicito se indique a esta corporación cual es la documentación que se debe evaluar para iniciar el trámite correspondiente."

Como producto del anterior requerimiento, el municipio de San Antero y Aqualia Latinoamérica acordaron que el trámite que debía continuar evaluando la CVS sería el iniciado por la entidad territorial. Así las cosas, el municipio haría uso de los productos obtenidos del contrato 061 de 2020, suscrito con la Fundación Santa Marta Bienestar y Desarrollo Socio – Cultural FUNCPC, cuyo objeto fue "contrato de prestación de servicios profesionales de asistencia, acompañamiento y apoyo a la secretaria de planeación y ajustes al plan de saneamiento y manejo de vertimientos PSMV del municipio de San Antero – Departamento de Córdoba". Este contrato fue ejecutado satisfactoriamente y su acta final se suscribió el 7 de julio de 2020.

En línea con lo anterior, y como prueba adicional del acuerdo que se realizó para cumplir el requerimiento de la CVS, el 31 de agosto de 2021 el secretario de planeación del municipio de San Antero, Ronney Francisco Marulanda López, remitió al subdirector de Gestión Ambiental de la CVS, Albeiro Arrieta López, el comprobante de pago para el permiso de vertimiento en el municipio de San Antero. En dicho memorial se indica:

"Por medio del presente, me permito enviar comprobante de pago realizado a la CVS, por concepto de permiso de vertimiento para el sistema de tratamiento del área urbana del municipio de San Antero. Lo anterior, para dar continuidad al trámite."

Con base en estas pruebas queda claro que el municipio de San Antero está adelantando ante la CVS el trámite de permiso de vertimientos y presentó el Plan de Saneamiento y Manejo de

Vertimiento para el municipio de San Antero, vigencia 2020 – 2029. Por tanto, no se configura la infracción ambiental que se indica en el pliego de cargos.

Con todo, es importante resaltar que Aqualia Latinoamérica S.A. E.S.P., con el fin de mantener en buen funcionamiento en el sistema de tratamiento de agua residual, viene desarrollando actividades diarias de acuerdo con lo estipulado en los manuales de operación, a fin de que no se altere o se vea afectado el proceso de degradación de materia orgánica en el sistema.

El proceso habitual de mantenimiento consiste en una limpieza de las zonas verdes, retiro de material sobre nadante y actualmente se viene tramitando un mantenimiento general que incluye el dragado y deshidratado del lodo del fondo de las lagunas, acompañado del retiro del material vegetal que se encuentra en la superficie del espejo de agua esto con el fin de mejorar la calidad del efluente y extender el periodo de vida útil de las mismas.

De igual forma, se continúan realizando caracterizaciones semestralmente, con el fin de determinar la carga contaminante a la entrada y a la salida del sistema de tratamiento y cuyo cumplimiento se puede evidenciar en los informes de PSMV que se vienen presentando a la CVS. Al efecto, se adjunta informes de PSMV del primer y segundo semestre del año 2020 con las respectivas caracterizaciones.

Por lo anterior, reiteramos las peticiones efectuadas en los descargos, en el sentido de, primero, de conformidad con las pruebas aportadas, y según lo previsto en el artículo 27 de la Ley 1333 de 2009, se declare que Aqualia Latinoamérica S.A. E.S.P. no es responsable de las infracciones ambientales que se le imputan…"

ANÁLISIS DE LA CVS DE LOS ALEGATOS PRESENTADOS POR AQUALIA LATINOAMÉRICA S.A. E.S.P.

En primer lugar, comprometidos con realizar un análisis de forma integral, es decir técnico y jurídico, La ha solicitado sean estudiados los motivos manifestados por Aqualia Latinoamérica en su escrito por personal competente para lo mismo, por tal motivo la Subdirección de Gestión, a través de informe técnico 2023-141 del 01 de febrero de 2023 ha considerado lo siguiente:

*"**1. ANTECEDENTES***

Mediante visita técnica, la CVS realiza Seguimiento al Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos-PSMV aprobado, generando el Informe De Visita ASA No. 2020 – 649 del 13 de noviembre del 2020.

Mediante Auto No. 12839 de 18 de enero del 2022 la CVS formula un pliego de cargos.
Mediante Auto No. 13624 del 1 de agosto del 2022 la CVS corre traslado para presentación de alegatos.

Mediante el oficio Radicado No. 20221107976 del 24 de agosto del 2022 la empresa AQUALIA S.A.E.S.P presenta alegatos.

2. CONSIDERACIONES TÉCNICAS

Mediante los oficios mencionados en los antecedentes presenta alegatos en la investigación ambiental administrativa por los siguientes cargos:

CARGO ÚNICO: *Por presuntamente no contar con el Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos aprobado por ésta Corporación y no contar con el permiso de vertimiento al sistema de tratamiento y por consiguiente estar realizando vertimiento ilegal.*

3. ACTIVIDADES REALIZADAS

Los descargos presentados por la empresa AQUALIA S.A.E.S.P se fundamentan principalmente lo siguiente:

Sea esta la oportunidad para recordad que AQUALIA Latinoamérica S.A. E.S.P., como actual operador de los servicios públicos de acueducto y alcantarillado del municipio de San Antero, inició trámites de la renovación del Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimiento - del municipio de San Antero, vigencia 2020 – 2029 ante la CVS mediante Radicado 20201109377. Sin embargo, mediante oficio del 11 de junio de 2021, con radicado 202112105404, de la Subdirección de Gestión Ambiental de la CVS y suscrito por Albeiro Arrieta López en su condición de subdirector de Gestión Ambiental, cuyo asunto es "Respuesta al radicado 20201109377: plan de saneamiento y manejo de vertimientos municipio de San Antero 2020-2029", se indicó:

"En atención al asunto, me permito informar que a la fecha la alcaldía del municipio de San Antero radicó ante esta Corporación el Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos PSMV así como la solicitud de permiso de Vertimientos para su evaluación y aprobación. Teniendo en cuenta que no se puede iniciar dos trámites para el mismo municipio, lo exhortamos a que se aúnen esfuerzos para presentar la documentación completa, en aras de dar cumplimiento a la normatividad ambiental vigente y un adecuado manejo a las aguas residuales del municipio. Por lo cual, en un término no mayor a un mes calendario, comedidamente le solicito se indique a esta corporación cual es la documentación que se debe evaluar para iniciar el trámite correspondiente."

Como producto del anterior requerimiento, el municipio de San Antero y AQUALIA Latinoamérica acordaron que el trámite que debía continuar evaluando la CVS sería el iniciado por la entidad territorial. Así las cosas, el municipio haría uso de los productos obtenidos del contrato 061 de 2020, suscrito con la Fundación Santa Marta Bienestar y Desarrollo Socio – Cultural FUNCPC, cuyo objeto fue "contrato de prestación de servicios profesionales de asistencia, acompañamiento y apoyo a la secretaria de planeación y ajustes al plan de saneamiento y manejo de vertimientos PSMV del municipio de San Antero – Departamento de Córdoba".

Este contrato fue ejecutado satisfactoriamente y su acta final se suscribió el 7 de julio de 2020. En línea con lo anterior, y como prueba adicional del acuerdo que se realizó para cumplir el requerimiento de la CVS, el 31 de agosto de 2021 el secretario de planeación del municipio de San Antero, Ronney Francisco Marulanda López, remitió al subdirector de Gestión Ambiental de la CVS, Albeiro Arrieta López, el comprobante de pago para el permiso de vertimiento en el municipio de San Antero. En dicho memorial se indica:

"Por medio del presente, me permito enviar comprobante de pago realizado a la CVS, por concepto de permiso de vertimiento para el sistema de tratamiento del área urbana del municipio de San Antero. Lo anterior, para dar continuidad al trámite." Con base en estas pruebas queda claro que el municipio de San Antero está adelantando ante la CVS el trámite de permiso de vertimientos y presentó el Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimiento para el municipio de San Antero, vigencia 2020 – 2029. Por tanto, no se configura la infracción ambiental que se indica en el pliego de cargos.

De acuerdo a lo manifestado por la empresa AQUALIA LATINOAMÉRICA S.A. E.S.P. en los oficios citados anteriormente la CVS considera lo siguiente:

Con respecto al primer punto del cargo:

- *A la fecha, el municipio de San Antero presentó el Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos PSMV para su evaluación. Este fue aprobado por medio de la Resolución No. 3-0099 de 05 de diciembre de 2022.*

Con respecto al segundo punto del cargo:

- *El municipio de San Antero presentó solicitud de Permiso de Vertimientos ante la CVS, se solicitaron ajustes a la información presentada y se realizó el cobro por concepto de evaluación, sin embargo, a pesar de que se presentaron los ajustes solicitados, de acuerdo a lo manifestado por el municipio se incurrió en un error en el momento de registrar el pago. Por lo anterior, solo hasta cuando se solucione la problemática y se obtenga la copia del recibo de pago, el trámite se remitirá para la formulación del Auto que lo inicia.*
- *Actualmente, se continúa realizando vertimiento ilegal proveniente del Sistema de Tratamientos de Aguas Residuales del municipio.*

4. CONCLUSIONES

En ese orden de ideas, luego de hacer el análisis técnico de las implicaciones anteriores y evaluar los ALEGATOS presentados por la empresa AQUALIA S.A E.S.P; se concluye que se aceptan parcialmente los fundamentos presentados…"

Si bien indica la empresa Aqualia que tanto el PSMV como el permiso de vertimientos han sido solicitados y, que adicional a ello es el ente territorial a quien se le trasladó la responsabilidad, es menester recordar lo que indica el Decreto 1076 de 2015:

ARTÍCULO 2.2.3.3.4.18. **Responsabilidad del prestador del servicio público domiciliario de alcantarillado.** *El prestador del servicio de alcantarillado como usuario del recurso hídrico, deberá dar cumplimiento a la norma de vertimiento vigente y contar con el respectivo permiso de vertimiento o con el Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos - PSMV reglamentado por la Resolución 1433 de 2004 del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible o la norma que lo modifique, adicione o sustituya.*

Es por lo anterior que podemos decir que es responsabilidad de la empresa Aqualia Latinoamérica SA. E.S.P. tramitar dicho permiso.

Por otro lado, tal como lo indica en sus argumentos, la solicitud de renovación fue radicada con oficio CVS N° 20201109377 de fecha 30 de diciembre de 2020, por lo cual se encuentra por fuera del término establecido para dicha renovación, según lo indicado en el Decreto 1076 de 2015:

ARTÍCULO 2.2.3.3.5.10. Renovación del permiso de vertimiento. *Las solicitudes para renovación del permiso de vertimiento deberán ser presentadas ante la autoridad ambiental competente, dentro del primer trimestre del último año de vigencia del permiso. El trámite correspondiente se adelantará antes de que se produzca el vencimiento del permiso respectivo.*

Para la renovación del permiso de vertimiento se deberá observar el trámite previsto para el otorgamiento de dicho permiso en el presente decreto. Si no existen cambios en la actividad generadora del vertimiento, la renovación queda supeditada solo a la verificación del cumplimiento de la norma de vertimiento mediante la caracterización del vertimiento.

Adicionalmente, teniendo en cuenta el informe técnico, el cual data de fecha 01 de febrero de 2023, es decir más de dos años después, aún el permiso de vertimientos no había sido aprobado, lo que implica que el vertimiento que se está realizando es ilegal y, que adicionalmente la conducta persiste.

Es por lo anterior que, a pesar de haber presentado las solicitudes, no puede la Corporación desconocer las infracciones cometidas en su momento.

CONSIDERACIONES JURÍDICAS QUE SOPORTAN LA COMPETENCIA DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE LOS VALLES DEL SINÙ Y DEL SAN JORGE – CVS.

La Ley 99 de 1993 en su artículo 31 referente a las funciones atribuidas a La Corporación Autónoma Regional de los Valles del Sinú y del San Jorge - CVS, dispone en el numeral 12 que le corresponde a las Corporaciones Autónomas Regionales: *"Ejercer las funciones de evaluación, control y seguimiento ambiental de los usos del agua, el suelo, el aire y los demás recursos naturales renovables, lo cual comprenderá el vertimiento, emisión o incorporación de sustancias o residuos líquidos, sólidos o gaseosos, a las aguas a cualquiera de sus formas, el aire o a poner en peligro el normal desarrollo sostenible de los recursos naturales renovables o*

impedir u obstaculizar su empleo para otros usos. Estas funciones comprenden la expedición de las respectivas licencias ambientales, permisos, concesiones, autorizaciones y salvoconductos."

Siguiendo el mismo principio de protección al medio ambiente, el Decreto 2811 de 1974, por el cual se dicta el Código Nacional de Recursos Naturales Renovables y de Protección al Medio Ambiente, en su artículo 2 establece que el ambiente es patrimonio común de la humanidad y necesario para la supervivencia y el desarrollo económico y social de los pueblos, en consecuencia uno de los objetivos de este Código, y de todas las autoridades ambientales es *"Lograr la preservación y restauración del ambiente y la conservación, mejoramiento y utilización racional de los recursos naturales renovables, según criterios de equidad que aseguren el desarrollo armónico del hombre y de dichos recursos, la disponibilidad permanente de estos y la máxima participación social, para beneficio de la salud y el bienestar de los presentes y futuros habitantes del territorio nacional".*

A su turno la Constitución Política de Colombia, consagra a lo largo de su articulado normas de estirpe ambiental en las que se erige como principio común la conservación y protección al medio ambiente, el derecho de las personas de disfrutar de un ambiente sano y la obligación radicada en cabeza del estado de proteger la biodiversidad, y siendo esta la norma de normas, según lo consagra el artículo 4 de la misma, las normas que la desarrollen deben estar en concordancia con esta, so pena de nulidad. Dentro de los artículos constitucionales que desarrollan aspectos de estirpe ambiental, se pueden encontrar los siguientes:

"Artículo 58: Se garantizan la propiedad privada y los demás derechos adquiridos con arreglo a las leyes civiles, los cuales no pueden ser desconocidos ni vulnerados por leyes posteriores. Cuando de la aplicación de una ley expedida por motivos de utilidad pública o interés social, resultare en conflicto los derechos de los particulares con la necesidad por ella reconocida, el interés privado deberá ceder al interés público o social. La propiedad es una función social que implica obligaciones. Como tal, le es inherente una función ecológica. El Estado protegerá y promoverá las formas asociativas y solidarias de propiedad. Por motivos de utilidad pública o interés social definidos por el legislador, podrá haber expropiación mediante sentencia judicial e indemnización previa. Este se fijará consultando los intereses de la comunidad y del afectado. En los casos que determine el legislador, dicha expropiación podrá adelantarse por vía administrativa, sujeta a posterior acción contenciosa-administrativa, incluso respecto del precio".

"Artículo 79: Todas las personas tienen derecho a gozar de un ambiente sano. La ley garantizará la participación de la comunidad en las decisiones que puedan afectarlo. Es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, conservar las áreas de especial importancia ecológica y fomentar la educación para el logro de estos fines".

"Artículo 80: El Estado planificará el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, su conservación, restauración o sustitución. Además, deberá prevenir y controlar los factores de deterioro ambiental, imponer las sanciones legales y exigir la reparación de los daños causados. Así mismo, cooperará con otras naciones en la protección de los ecosistemas situados en las zonas fronterizas".

La Ley 2387 del 2024, en su artículo **2**, modificó el artículo 1 de la ley 1333 de 2009, el cual quedará así: ***"ARTÍCULO 1. Titularidad de la potestad sancionatoria en materia ambiental.*** *El Estado es el titular de la potestad sancionatoria en materia ambiental y lo ejerce sin perjuicio de las competencias legales de otras autoridades a través del Ministerio de Ambiente y Desarrollo sostenible, la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales,* ***las Corporaciones Autónomas Regionales****, las de Desarrollo Sostenible, las Unidades Ambientales de los grandes centros urbanos a que se refiere el artículo 55 y 66 de la Ley 99 de 1993, los establecimientos públicos ambientales a que se refiere el artículo 13 de la Ley 768 de 2002 y Parques Nacionales Naturales de Colombia, de conformidad con las competencias establecidas por la ley y los reglamentos.*

PARÁGRAFO. *En materia ambiental, se presume la culpa o el dolo del infractor, lo cual dará lugar a las medidas preventivas y sancionatorias. El infractor será sancionado definitivamente si no desvirtúa, en los términos establecidos en la presente Ley, la presunción de culpa o dolo para lo cual tendrá la carga de la prueba y podrá utilizar todos los medios probatorios legales".*

En virtud del articulado anterior, la Corporación de los Valles del Sinú y del San Jorge CVS, es la entidad investida con capacidad y competencia suficientes para adelantar el respectivo proceso sancionatorio ambiental, teniendo en cuenta que el fin que mueve su actuación es la preservación y protección del medio ambiente, garantizando con esto que los recursos naturales, en este caso recurso hídrico, sea utilizado conforme a las disposiciones legales vigentes que regulan la materia como lo es el Decreto 2811 de 1974 para garantizar su disfrute y utilización.

ANÁLISIS DE LA RESPONSABILIDAD EN ASUNTOS AMBIENTALES

El procedimiento sancionatorio ambiental, se encuentra regulado por la Ley 1333 de 2009, modificada y adicionada por la Ley 2387 del 2024, la cual entró en vigor a partir del 25 de julio de 2024, lo que indica que en la presente actuación se aplicaran lo dispuesto en la normativa vigente en lo relacionado con la determinación de la responsabilidad y las sanciones ambientales.

Que en lo que respecta a la declaratoria de responsabilidad en el procedimiento sancionatorio reza el artículo 27 de la Ley 1333 de 2009, modificado mediante artículo 9 de la ley 2387 del 25 de julio de 2024: " *Dentro de los ochenta (80) días siguientes al vencimiento del término para presentar descargos o alegatos de conclusión, según sea el caso, la autoridad ambiental mediante acto administrativo motivado, declarará la responsabilidad del infractor e impondrá las*

sanciones y las medidas de Corrección y de compensación a las que haya lugar para la reparación del daño causado si fuere el caso. En caso de que no hora lugar a declarar la responsabilidad, la autoridad ambiental exonerará a los presuntos infractores, mediante acto administrativo motivado.

PARÁGRAFO. Si la decisión excede este periodo de tiempo, la autoridad deberá informar a la Procuraduría General de la Nación."

Que a su turno el artículo 5 de la Ley 1333 de 2009, modificado por el artículo 6 de la ley 2387 de 2024 consagra*: "Infracciones. Se considera infracción en materia ambiental toda acción u omisión que constituya violación de las normas contenidas en el Código de Recursos Naturales Renovables, Decreto Ley 2811 de 1974, en la Ley 99 de 1993, en la Ley 165 de 1994, las demás normas ambientales vigentes y en los actos administrativos con contenido ambiental expedidos por la autoridad ambiental competente. Será también constitutivo de infracción ambiental la comisión de un daño al medio ambiente, con las mismas condiciones que para configurar la responsabilidad civil extracontractual establece el Código Civil y la legislación complementaria, a saber: El daño, el hecho generador con culpa o dolo y el vínculo causal entre los dos. Cuando estos elementos se configuren darán lugar a una sanción administrativa ambiental, sin perjuicio de la responsabilidad que para terceros pueda generar el hecho en materia civil.*

PARÁGRAFO 1º. En las infracciones ambientales se presume la culpa o dolo del infractor, quien tendrá a su cargo desvirtuarla, en los términos establecidos en la presente Ley.

PARÁGRAFO 2º. El infractor será responsable ante terceros de la reparación de los daños y perjuicios causados por su acción u omisión.
(Ver ley 165 de 1994.)

PARÁGRAFO 3. Será también constitutivo de infracción ambiental el tráfico ilegal, maltrato, introducción y trasplante ilegal de animales silvestres, entre otras conductas que causen un darlo al medio ambiente.

PARÁGRAFO 4. El incumplimiento de las obligaciones o condiciones previstas en actos administrativos sin contenido ambiental expedidos por la autoridad ambiental competente será objeto de aplicación del artículo 90 de la Ley 1437 de 2011. Se entenderá por obligaciones o condiciones sin contenido ambiental, aquellas cuyo incumplimiento no afecten conocimiento, educación, seguimiento, planificación y control ambiental, las que no hayan sido emitidas para evitar el daño o afectación ambiental, y/o aquellas que no hayan sido impuestas para mitigarlos, compensarlos y restaurarlos.

PARÁGRAFO 5. Los actos administrativos con contenido ambiental expedidos por la autoridad ambiental competente como las licencias ambientales, o permisos ambientales, incluye también los planes de contingencia para la mitigación del riesgo y el control de las contingencias ambientales".

Entonces bien, hay lugar a endilgar responsabilidad a una persona ante la comisión de una Ahora bien, es de recibo reiterarle al investigado que se entiende por contaminación la alteración del ambiente con sustancias o formas de energía puestas en él, por actividad humana o de la naturaleza, en cantidades, concentraciones o niveles capaces de interferir el bienestar y la salud de las personas, atentar contra la flora y la fauna, degradar la calidad del ambiente o de los recursos de la nación o de los particulares.

El caso bajo estudio, la infracción ambiental consistente en presuntamente no contar con el Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos-PSMV aprobado por esta Corporación, y por no con contar con permiso de vertimientos del sistema de tratamiento y, por consiguiente, estar realizando vertimiento ilegal, de conformidad con lo contenido y argumentado técnicamente por el informe de visita ASA N° 2022- 649 del 13 de noviembre de 2020.

Luego entonces el actuar de la Corporación, no es otro distinto que la del cuidado del medio ambiente y el deber legal y constitucional de protección y preservación de los recursos naturales y sobre la prevención del deterioro ambiental.

En observancia a lo anterior, la Corporación atendiendo a que de conformidad con el Informe de visita ASA N° 2022- 649 del 13 de noviembre de 2020, en donde se evidenció claramente que no contaba con el Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos-PSMV aprobado por esta Corporación, y por no con contar con permiso de vertimientos del sistema de tratamiento y, por consiguiente, estar realizando vertimiento ilegal, en vista de lo evidenciado técnicamente y teniendo en cuenta que el material obrante en el expediente de la referencia es idónea para definir la responsabilidad del implicado.

La Corte Constitucional estableció dos grandes precedentes Jurisdiccionales en Sentencia T-851/2010, a saber: *"Una lectura sistemática y armónica de las normas que orientan la concepción ecologista de la Constitución Política, particularmente de los Artículos 2°, 8°, 49, 58, 67, 79, 80 y 95-8, permite entender el sentido que jurídicamente identifica este fenómeno. Así, mientras por una parte se reconoce el medio ambiente sano como un derecho del cual son titulares todas las personas - quienes a su vez están legitimadas para participar en las decisiones que puedan afectarlo y deben colaborar en su conservación."*

Así mismo es importante recalcar que en materia sancionatoria ambiental existe una presunción de culpa o dolo del infractor que lo obliga a desvirtuar dicha presunción a través de los medios probatorios legalmente constituido, sin que esto vulnere el principio de presunción de inocencia del presunto infractor.

Sobre el particular la Corte Constitucional en sentencia C-595 de 2010 en el cual se demanda por inconstitucionalidad el parágrafo único del artículo 1° (Modificado por el artículo 2 de la

ley 2387 de 2024),y el parágrafo 1° del artículo 5° de la ley 1333 de 2009, (Modificado por el artículo 6 de la ley 2387 de 2024) "Por la cual se establece el procedimiento sancionatorio ambiental y se dictan otras disposiciones", cuyas disposiciones contemplan lo siguiente:

PARÁGRAFO. En materia ambiental, se presume la culpa o el dolo del infractor, lo cual dará lugar a las medidas preventivas y sancionatorias. El infractor será sancionado definitivamente si no desvirtúa, en los términos establecidos en la presente Ley, la presunción de culpa o dolo para lo cual tendrá la carga de la prueba y podrá utilizar todos los medios probatorios legales.

PARÁGRAFO 1o. En las infracciones ambientales se presume la culpa o dolo del infractor, quien tendrá a su cargo desvirtuarla, en los términos establecidos en la presente Ley.

La Corte en dicha jurisprudencia estableció: "En primer lugar, la Corte reitera su jurisprudencia constitucional en orden a señalar que el principio de presunción de inocencia es aplicable como criterio general en el derecho administrativo sancionador. Sin embargo, la rigurosidad en su aplicación, propia del ámbito del derecho penal, no es trasladable in toto -con el mismo alcance integral- al derecho administrativo sancionador, dada la existencia de diferencias entre los regímenes (naturaleza de la actuación, fines perseguidos, ámbitos específicos de operación, etc.), que lleva a su aplicación bajo ciertos matices o de manera atenuada (ámbito de la responsabilidad subjetiva). Incluso, excepcionalmente, podría establecerse la responsabilidad sin culpa (objetiva).

Según se explicará, la ley cuestionada conserva una responsabilidad de carácter subjetiva en materia sancionatoria ambiental toda vez que los elementos de la culpa y el dolo continúan vigentes por disposición expresa del legislador. Ello además permitirá sostener que cuando las infracciones ambientales constituyan a su vez ilícitos penales, frente al ámbito penal operará a plenitud la presunción de inocencia (artículo 29 superior).

La presunción de culpa o dolo establecida en el procedimiento sancionatorio ambiental se encaja dentro de las denominadas presunciones legales -iuris tantum-, toda vez que admiten prueba en contrario, como puede advertirse de una lectura literal de los parágrafos legales cuestionados. **En esa medida, hasta antes de imponerse la sanción definitiva, el presunto infractor podrá desvirtuar la presunción utilizando todos los medios probatorios legales.**

Una presunción legal resulta ajustada a la Constitución en la medida que aparezca como razonable, es decir, que responda a las leyes de la lógica y de la experiencia, que persiga un fin constitucionalmente valioso, y que sea útil, necesaria y estrictamente proporcionada para alcanzar el fin.

Esta Corporación considera que la presunción legal establecida y la consecuente inversión de la carga de la prueba no desconocen el principio de presunción de inocencia.

El legislador ha establecido en esta oportunidad un mecanismo producto de la libertad de configuración de instituciones procesales y la definición del régimen de responsabilidad administrativa ambiental. Este procedimiento de técnica jurídica adoptado por el legislador busca hacer efectivos bienes jurídicos constitucionales de vital importancia para la preservación de la humanidad como lo es la conservación del ambiente sano.

Bien constitucional que constituye un objetivo de principio dentro del Estado social de derecho (artículos 1º, 2º y 366 superiores), un derecho fundamental por conexidad al estar ligado con la vida y la salud (artículos 11 y 49 superiores), un derecho colectivo (ser social) que compromete a la comunidad (artículo 88 superior) y un deber constitucional en cabeza de todos (artículos 8º, 79, 95 y 333 superiores).

De ahí el reconocimiento internacional de que el medio ambiente es un patrimonio común de la humanidad porque su protección asegura la supervivencia de las generaciones presentes y futuras. (…)

Entonces, en opinión del Congreso de la República los apartes legales se avienen a la presunción de inocencia porque: i) tal principio puede atenuarse en su rigurosidad en el campo del derecho sancionatorio administrativo; ii) se supera el juicio de razonabilidad al pretender una redistribución de las cargas probatorias a favor del interés de superior del medio ambiente sano en conexión con la vida; iii) se facilita la imposición de medidas preventivas y sancionatorias; iv) la presunción existe solamente en el campo de la culpabilidad por lo que no excluye a la administración de la obligación de probar la existencia de la infracción ambiental y no impide que la misma se pueda desvirtuar mediante los medios legales probatorios; e v) incluso la Corte en ciertos casos ha avalado regímenes de responsabilidad objetiva referentes a las infracciones cambiarias y de tránsito.

Para esta Corporación la creación de la presunción legal resulta razonable por cuanto atiende la correspondencia entre la experiencia -circunstancias ambientales descritas- y la defensa del bien jurídico constitucional -medio ambiente sano-, bajo los principios internacionales ambientales que se han mencionado.

Si bien la regla general es que los sujetos procesales deben demostrar los hechos que alegan como fundamento de su pretensión -onus probandi incumbi actori-, también lo es que con el ánimo de propender por la efectividad de los bienes jurídicos constitucionalmente relevantes, el legislador podía liberar al Estado de la carga de la prueba -redistribución de las cargas

procesales-, sin perjuicio de que el presunto infractor pueda desvirtuar la culpa o el dolo mediante prueba en contrario.

Por lo tanto, los hechos en que se funda la presunción general establecida atienden a circunstancias acreditadas y a posibilidades fundadas en la experiencia que resultan razonables dado el bien jurídico constitucional que se protege -medio ambiente sano- para la preservación de las generaciones presentes y futuras.

Adicionalmente, este Tribunal ha sostenido que "en sociedades diversas donde los conflictos se presentan con bastante frecuencia, las presunciones juegan un papel importante. Aseguran, de un lado, que materias sobre las que tanto la experiencia como la técnica proyectan cierto grado de certeza, no sean sometidas a la crítica y se acepten de manera más firme. Acudir a presunciones contribuye, de otro lado, a agilizar ciertos procesos pues exime de la actividad probatoria en casos en los que tal actividad es superflua o demasiado difícil."

La Corte considera que la presunción general establecida se acompasa con la Constitución toda vez que no exime al Estado de su presencia activa en el procedimiento sancionatorio ambiental a efectos de verificar los hechos u omisiones constitutivas de infracción a las normas ambientales. Las distintas etapas previstas en el procedimiento sancionatorio -Ley 1333 de 2009- modificado por la Ley 2387 de 2024, son una clara muestra de las garantías procesales que se le otorgan al presunto infractor -debido proceso-

Por lo que el principio de la inversión de la prueba en materia ambiental está más que amparada constitucional y legalmente, y que es el presunto infractor quien está llamado a desvirtuar la presunción de culpa o dolo imputada y ostenta la carga probatoria para soportar, defender y demostrar que su conducta no es constitutiva de violación alguna de normas ambientales, razón por la cual la CVS, está en el deber de ejercer su potestad sancionatoria en de la protección y cuidado de los recursos naturales y el medio ambiente

NORMAS VIOLADAS

Que de conformidad con lo anteriormente expresado esta Corporación considera que se han presuntamente infringido varias disposiciones:

La Constitución Política en el artículo 8, establece que: *"Es obligación del estado y de las personas proteger las riquezas naturales de la nación"; por lo que el deber de protección de los recursos naturales va de la mano con la función de planificación en el manejo y aprovechamiento de esos recursos, para de esta forma garantizar su desarrollo sostenible, su conservación, restauración o sustitución.*

El artículo 49 de la constitución política de Colombia señala: "… El saneamiento ambiental es un servicio público a cargo del estado"

El artículo 79 expone: "Todas las personas tienen derecho a gozar de un ambiente sano".

Según el artículo 1 del decreto-ley 2811 de 1974 se indica: "El ambiente es patrimonio común. El Estado y los particulares deben participar en su preservación y manejo, que son de utilidad pública e interés social.

La preservación y manejo de los recursos naturales renovables también son de utilidad pública e interés social. (C.N. artículo 30).

Que de acuerdo con el artículo 8 Ibidem.- Se consideran factores que deterioran el ambiente, entre otros:

"a.- La contaminación del aire, de las aguas, del suelo y de los demás recursos naturales renovables.

Se entiende por contaminación la alteración del ambiente con sustancias o formas de energía puestas en él, por actividad humana o de la naturaleza, en cantidades, concentraciones o niveles capaces de interferir el bienestar y la salud de las personas, atentar contra la flora y la fauna, degradar la calidad del ambiente o de los recursos de la nación o de los particulares.

Se entiende por contaminante cualquier elemento, combinación de elementos, o forma de energía que actual o potencialmente puede producir alteración ambiental de las precedentemente escritas..."

Que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 35 Ibidem.- Se prohíbe descargar, sin autorización, los residuos, basuras y desperdicios, y en general, de desechos que deterioren los suelos o, causen daño o molestia al individuo o núcleos humanos

El decreto 1076 de 2015, en su artículo 2.2.3.3.5.1. *Requerimiento de permiso de vertimiento. Toda persona natural o jurídica cuya actividad o servicio genere vertimientos a las aguas superficiales, marinas, o al suelo, deberá solicitar y tramitar ante la autoridad ambiental competente, el respectivo permiso de vertimientos.*

Artículo 2.2.3.3.4.4. Actividades no permitidas. No se permite el desarrollo de las siguientes actividades.

1. El lavado de vehículos de transporte aéreo y terrestre en las orillas y en los cuerpos de agua, así como el de aplicadores manuales y aéreos de agroquímicos y otras sustancias tóxicas y sus envases, recipientes o empaques.

2. La utilización del recurso hídrico, de las aguas lluvias, de las provenientes de acueductos públicos o privados, de enfriamiento, del sistema de aire acondicionado, de condensación y/o de síntesis química, con el propósito de diluir los vertimientos, con anterioridad al punto de control del vertimiento.

3. Disponer en cuerpos de aguas superficiales, subterráneas, marinas, y sistemas de alcantarillado, los sedimentos, lodos, y sustancias sólidas provenientes de sistemas de tratamiento de agua o equipos de control ambiental y otras tales como cenizas, cachaza y bagazo. Para su disposición deberá cumplirse con las normas legales en materia de residuos sólidos.

Artículo 2.2.3.3.4.3. Prohibiciones. No se admite vertimientos:
"(…)

6. En calles, calzadas y canales o sistemas de alcantarillados para aguas lluvias, cuando quiera que existan en forma separada o tengan esta única destinación.
(…)

8. Sin tratar, provenientes del lavado de vehículos aéreos y terrestres, del lavado de aplicadores manuales y aéreos, de recipientes, empaques y envases que contengan o hayan contenido agroquímicos u otras sustancias tóxicas.
(…)".

FUNDAMENTO JURÍDICOS QUE SOPORTAN LA IMPOSICIÓN DE UNA SANCIÓN DE CARÁCTER AMBIENTAL

El artículo 27 de la Ley 1333 de 2009, modificado por el artículo 9 de la ley 2387 de 2024, establece la *Determinación de la responsabilidad y sanción, consagra****: "Determinación de la responsabilidad y sanción,*** *Dentro de los ochenta (80) días siguientes al vencimiento del término para presentar descargos o alegatos de conclusión, según sea el caso, la autoridad ambiental mediante acto administrativo motivado, declarará la responsabilidad del infractor e impondrá las sanciones y las medidas de Corrección y de compensación a las que haya lugar para la reparación del daño causado si fuere el caso. En caso de que no hora lugar a declarar la responsabilidad, la autoridad ambiental exonerará a los presuntos infractores, mediante acto administrativo motivado.*

PARÁGRAFO. Si la decisión excede este periodo de tiempo, la autoridad deberá informar a la Procuraduría General de la Nación."

El Artículo 40 de la Ley 1333 de 2009 modificado mediante artículo 17 de la Ley 2387 del 25 de julio de 2024 establece:

"Sanciones. Las sanciones señaladas en este artículo se impondrán como principales o accesorias al responsable de la infracción ambiental. La autoridad ambiental competente impondrá al (los) infractor (es), de acuerdo con la gravedad de la infracción mediante resolución motivada, alguna o algunas de las siguientes sanciones:

1. *Amonestación escrita.*
2. *Multas hasta por cien mil salarios mínimos mensuales legales Vigentes (100.000 Salario Mínimo Mensual Legal Vigente).*
3. *Cierre temporal o definitivo del establecimiento, edificación o servicio.*
4. *Revocatorio o caducidad de licencia ambiental, autorización, concesión, permiso o registro.*
5. *Demolición de obra a costa del infractor.*
6. *Decomiso definitivo de especímenes, especies silvestres exóticas, productos y subproductos, elementos, medios o implementos utilizados para cometer la infracción.*
7. *Restitución de especímenes de especies de flora y fauna silvestres o acuática.*

Parágrafo 1. La imposición de una o varias de las sanciones aquí señaladas no exime al Infractor de ejecutar las obras o acciones ordenadas por la autoridad ambiental competente, de restaurar el medio ambiente, los recursos naturales, el paisaje o los ecosistemas afectados. Estas sanciones se aplicarán sin perjuicio de las acciones civiles, penales, fiscales y disciplinarias a que hubiere lugar.

Parágrafo 2. El Gobierno Nacional definirá mediante reglamento los criterios para la imposición de las sanciones de que trata el presente artículo, definiendo atenuantes y agravantes contemplados en la Ley. Se tendrá en cuenta la magnitud del daño o afectación ambiental, y las capacidades socioeconómicas del infractor sea persona natural o jurídica, de acuerdo con lo establecido en el presente artículo.

Parágrafo 3. Se tendrá en cuenta la magnitud del daño o afectación ambiental, las capacidades socioeconómicas del infractor sea persona natural o jurídica, en caso de que la multa quede como sanción deberá imponerse siempre acompañada de una o varias de las otras sanciones mencionadas en el presente artículo de acuerdo con lo considerado por la autoridad ambiental competente.

En todo caso, cuando la autoridad ambiental decida imponer una multa como sanción, sin una

sanción adicional, deberá justificarlo técnicamente.

Parágrafo 4. Ante la renuencia del infractor en el cumplimiento de las sanciones previstas en los numerales 1, 3, 5, 7, cuando se haya designado como tenedor de fauna silvestres, y se aplicará lo dispuesto en el artículo 90 de la Ley 1437 de 2011.

Parágrafo 5. El valor de la multa en Salario Mínimo Mensual Legal Vigente establecido en el numeral 2 del presente artículo se liquidará con el valor del Salario Mínimo Mensual Legal Vigente a la fecha de expedición del acto administrativo que determine la responsabilidad e imponga la sanción"

JUSTIFICACIÓN TÉCNICA DE IMPOSICIÓN DE MULTA COMO ÚNICA SANCIÓN

Que, el Parágrafo 3 del artículo 40 de la Ley 1333 de 2009, modificado mediante artículo 17 de la Ley 2387 del 25 de julio de 2024, establece que en caso de que la multa quede como sanción deberá imponerse siempre acompañada de una o varias de las otras sanciones mencionadas en el citado artículo, de acuerdo con lo considerado por la autoridad ambiental competente, sin embargo en el caso de que la autoridad ambiental decida imponer una multa como sanción, sin una sanción adicional, deberá justificarlo técnicamente, razón por la cual se expone como justificación para la imposición de una multa como única sanción en el presente procedimiento administrativo, por parte de la Corporación Autónoma Regional de los Valles del Sinú y del San Jorge CVS, la siguiente:

Para el presente asunto en el cual la investigación ambiental se adelantó en contra de un ente territorial como lo es el Municipio de San Antero y la empresa Aqualia, por incumplimiento a normas de carácter ambiental y no contar con los respectivos permisos ambientales, es procedente entrar a analizar la imposición de las sanciones ambientales descritas en la legislación sancionatoria ambiental.

1. **La Amonestación escrita como sanción ambiental, se establece que e**sta sanción se aplicará cuando el presunto infractor sea una persona natural (artículo 20 de la Ley 2387 de 2024), es decir que dicha sanción se aplica exclusivamente a personas naturales, lo cual no es aplicable al caso concreto por tratarse de un Municipio, el cual tiene como naturaleza jurídica la de una persona jurídica de derecho público, así como en contra de una empresa privada que ejerce funciones públicas, no es pertinente la imposición de dicha sanción al no ser personas naturales.

2. **Cierre temporal o definitivo del establecimiento, edificación o servicio**: La imposición de un cierre, ya sea temporal o definitivo, como sanción, implicaría la imposibilidad de llevar a cabo cualquier actividad en la edificación, establecimiento o servicio. En el presente asunto, no es pertinente la imposición de dicha sanción, considerando que la infracción cometida no se refiere ni recae sobre un establecimiento, edificación o estructura que pueda ser aplicada la sanción de cierre, sino que se trata del incumplimiento de obligaciones concretas de actos administrativos y disposiciones normativas de carácter ambiental.

3. **Revocatoria o caducidad de licencia ambiental, autorización, concesión, permiso o registro**: Esta opción no es aplicable en el presente asunto, ya que no se está en presencia de un incumplimiento de un permiso, concesión, licencia o registro otorgado por la autoridad ambiental, sino de un incumplimiento del **Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimiento - PSMV**, el cual es un instrumento de manejo ambiental, que contempla el conjunto de programas, proyectos y actividades, con sus respectivos cronogramas e inversiones necesarias para avanzar en el saneamiento y tratamiento de los vertimientos, incluyendo la recolección, transporte, tratamiento y disposición final de las aguas residuales descargadas al sistema público de alcantarillado, tanto sanitario como pluvial, los cuales deberán estar articulados con los objetivos y las metas de calidad y uso que defina la autoridad ambiental competente para la corriente, tramo o cuerpo de agua.

Por su parte en lo que se refiere al **permiso de vertimiento**, en la presente investigación, el cargo formulado es precisamente no contar con dicho permiso ambiental, el cual es obligatorio por Ley, por lo que no es posible aplicar la sanción analizada al no existir un permiso que revocar.

4. **Demolición de obra a costa del infractor**: La presente investigación no se refiere a ninguna obra construida que sea pueda ser objeto de demolición.

5. **Decomiso definitivo de especímenes, especies silvestres exóticas, productos y subproductos, elementos, medios o implementos utilizados para cometer la infracción**: En el contexto de la presente investigación, no se abordan situaciones relacionadas con la utilización de dichos elementos, especies o medios utilizados en la comisión de la conducta considerada como infracción. Por lo tanto, sería inapropiado e improcedente, imponer una sanción que consistiera en la aprehensión material y definitiva de los dichos elementos, más si se tiene en cuenta que no se involucra especímenes, especies silvestres exóticas o productos, elementos, medios e implementos utilizados en la infracción ambiental investigada.

6. **Restitución de especímenes de especies de flora y fauna silvestres o acuáticas**: Por la naturaleza propiamente dicha de la infracción ambiental en la presente investigación, no se torna procedente imponer dicha sanción, ya que no se involucra el aprovechamiento, tráfico o tenencia ilegal de fauna o flora ni hay lugar a la restitución de dichas especies silvestres o acuáticas.

Luego de analizadas cada una de las sanciones ambientales que pueden ser impuesta al infractor ambiental, se concluye que solo es procedente técnica y jurídicamente imponer la multa como única sanción al Municipio de San Antero y la empresa Aqualia.

DETERMINACIÓN DE LA SANCIÓN

Que el artículo 43 de la Ley 1333 de 2009. Establece: "*Multa. Consiste en el pago de una suma de dinero que la autoridad ambiental impone a quien con su acción u omisión infringe las normas ambientales.*

De igual manera, la Corporación Autónoma Regional de los Valles del Sinú y del San Jorge – CVS, con relación a la tasación de la multa en el caso concreto, la Corporación a través de

funcionarios competentes de la División de Calidad Ambiental emitieron **CONCEPTO TÉCNICO CT-2024-1545 de fecha 18 de noviembre de 2024**, por el cual se hace el cálculo de multa ambiental al **MUNICIPIO DE SAN ANTERO**, representado legalmente por el señor alcalde DENNYS CHICA FUENTES y/o quien haga sus veces, el cual expresa lo siguiente:

"CONCEPTO TÉCNICO CT-2024-1545

De acuerdo a lo descrito en el informe de visita ASA 2020 – 649, presentado por profesionales adscritos a La Subdirección de Gestión Ambiental de la CVS, a las pruebas expuestas en los mismos y tomando como base el MANUAL CONCEPTUAL Y PROCEDIMENTAL DE LA METODOLOGÍA PARA EL CALCULO DE MULTAS POR INFRACCIÓN A LA NORMATIVIDADAMBIENTAL del MADS, se procedió a realizar la Tasación de la Multa Económica a la que debe hacerse acreedor el posible infractor una vez determinada su responsabilidad en las afectaciones realizadas a los Recursos Naturales y el Ambiente, y conforme al concepto que emita la Unidad de Jurídica Ambiental teniendo en cuenta que la multa es una sanción que debe actuar como un disuasivo del comportamiento, buscando reducir los incentivos a no cumplir con las normas y las reglas establecidas. Dicho valor se calculó basado en los siguientes preceptos:

$$\text{Multa} = B + [(\alpha * i)(1 + A) + Ca] * Cs$$

En donde:

***B**: Beneficio ilícito*

***α**: Factor de temporalidad*

***A**: Circunstancias agravantes y atenuantes*

***i**: Grado de afectación ambiental*

***Ca**: Costos asociados*

***Cs**: Capacidad socioeconómica del infractor y/o evaluación del riesgo*

CÁLCULO Y ASIGNACIÓN DE VALORES A LAS VARIABLES

❖ ***Beneficio Ilícito (B)***

- *El cálculo de la variable **BENEFICIO ILÍCITO** tomándolo como la ganancia económica que podría obtener el infractor fruto de su conducta se determinó teniendo en cuenta los **Ingresos Directos** los **Costos Evitados** (ahorro económico o ganancia percibida por el infractor al incumplir o evitar las inversiones exigidas por la norma ambiental y/o los actos administrativos) y los **Ahorros de Retraso** (Referidos especialmente a la rentabilidad que percibiría la inversión que se deja de realizar al infringir la norma) y el cálculo de la Capacidad de Detección de la Conducta por parte de la Autoridad Ambiental.*

- *El Beneficio Ilícito se determina conforme a la siguiente ecuación:*

$$B = \frac{y \times (1 - p)}{p}$$

Dónde: B = Beneficio Ilícito

y = Sumatoria de Ingresos directos, Costos Evitados y Ahorro de Retraso

p = Capacidad de detección de la Autoridad Ambiental

Por lo tanto:

*A. Realmente el cálculo de los **Ingresos Directos** para este evento no puede tasarse debido a que el Municipio de San Antero, por el hecho ilícito no recibió de forma efectiva el ingreso de un recurso, por esta razón no se determina valor monetario.*

*B. Para el cálculo de los **Costos Evitados**, se tiene en cuenta los recursos que el Municipio de San Antero debió invertir para contar con el permiso de vertimientos al sistema de tratamiento de aguas residuales del Municipio y no estar realizando vertimiento ilegal, actividades que tienen un costo aproximado Diez Millones Novecientos Mil Pesos Moneda Legal Colombiana ($10.900.000, oo).*

*C. Para el presente ejercicio no es posible determinar el **Ahorro por Retraso**, debido a que el presunto infractor no cumplió con la norma ambiental ni con las actividades e inversiones que de esta dependían, razón por la cual no hubo retrasos de la que se pudiera determinar una utilidad por parte del infractor. En tal sentido el Ahorro por Retraso se determina como **CERO ($0)**.*

*- **Capacidad de Detección de la Conducta:** Teniendo en cuenta que el hecho ilícito es realizado por el Municipio de San Antero, por no contar con el permiso de vertimientos al sistema de tratamiento de aguas residuales del Municipio y por consiguiente estar realizando vertimiento ilegal, al cual la corporación ha venido realizando seguimiento permanente, por lo cual se puede decir que la capacidad de detección es Alta y por ende se le asigna un valor de **CERO PUNTO CINCO (0.5)**.*

*- Una vez calculadas todas las variables posibles finalmente se determina el Valor del **BENEFICIO ILÍCITO** mediante la fórmula incluida al inicio de este documento.*

$$B = \frac{y \times (1 - p)}{p}$$

(y1)	*Ingresos directos*	*0*		
(y2)	*Costos evitados*	*$ 10.900.000*		
(y3)	*Ahorros de retraso*	*0*	*$ 10.900.000*	***= Y***

(p)	*Capacidad de detecció de la conducta*	*Baja = 0,40* *Media = 0,45* *Alta = 0,50*	***0,5***	***= p***
B =	***$ 10.900.000,oo***			

*-El valor calculado del **BENEFICIO ILÍCITO** por parte del Municipio de San Antero, por no contar con el permiso de vertimientos al sistema de tratamiento de aguas residuales del Municipio y por consiguiente estar realizando vertimiento ilegal, es de **DIEZ MILLONES NOVECIENTOS MIL PESOS MONEDA LEGAL COLOMBIANA ($10.900.000,oo).***

❖ ***Factor de Temporalidad (α)***

Factor de temporalidad	Número de días continuos o discontinuos durante los cuales sucede el ilícito (Entre 1 y 365)	1
	α = (3/364)*d+(1-(3/364)	1,00

❖ ***Valoración de la importancia de la afectación (i)***

$$I = (3IN) + (2EX) + PE + RV + MC$$

Para la valoración de la importancia de la afectación se emplean los siguientes atributos:

- *Intensidad (IN)*
- *Extensión (EX)*
- *Persistencia (PE)*
- *Reversibilidad (RV)*
- *Recuperabilidad (MC)*

AFECTACIÓN AMBIENTAL

- Grado de afectación ambiental:
Para la estimación de esta variable se estimó la importancia de la afectación mediante la calificación de cada uno de los atributos, atendiendo a los criterios y valores determinados en la Resolución No. 2086 del MAVDT, en el Manual Conceptual y Procedimental de la Metodología para el Cálculo de Multas por Infracción a la Normatividad Ambiental, y basándose en la evaluación de las pruebas recogidas y la visita realizada al lugar de afectación. Los atributos evaluados y su ponderación, luego de realizada la matriz de interacción medio – acción se pueden identificar como sigue:

Atributos	Definición	Calificación	Ponderación
Intensidad (IN)	Define el grado de incidencia de la acción sobre el bien de protección	Afectación de bien de protección representada en una desviación del estándar fijado por la norma y comprendida en el rango entre 0 y 33%.	1
		Afectación de bien de protección representada en una desviación del estándar fijado por la norma y comprendida en el rango entre 34% y 66%.	4
		Afectación de bien de protección representada en una desviación del estándar fijado por la norma y comprendida en el rango entre 67% y 99%.	8
		Afectación de bien de protección representada en una desviación del estándar fijado por la norma igual o superior o al 100%	12
		IN	1

El valor de la Intensidad se pondera en 1 debido a que la Afectación de bien de protección representada en una desviación del estándar fijado por la norma y comprendida en el rango entre 0% y 33%

Atributos	Definición	Calificación	Ponderación
Extensión (EX)	Se refiere al área de influencia del impacto en relación con el entorno	Cuando la afectación puede determinarse en un área localizada e inferior a una (1) hectárea.	1
		Cuando la afectación incide en un área determinada entre una (1) hectárea y cinco (5) hectáreas	4
		Cuando la afectación se manifiesta en un área superior a cinco (5) hectáreas.	12

		EX	1

El valor de la extensión se pondera en 1 debido a que la afectación puede determinarse en un área localizada e inferior a una (1) hectárea.

Atributos	Definición	Calificación	Ponderación
Persistencia (PE)	Se refiere al tiempo que permanecería el efecto desde su aparición y hasta que el bien de protección retorne a las condiciones previas a la acción	Si la duración del efecto es inferior a seis (6) meses.	1
		Cuando la afectación no es permanente en el tiempo, se establece un plazo temporal de manifestación entre seis (6) meses y cinco (5) años.	3
		Cuando el efecto supone una alteración, indefinida en el tiempo, de los bienes de protección o cuando la alteración es superior a 5 años.	5
		PE	3

El valor de la persistencia se pondera en 3 ya que la afectación no es permanente en el tiempo, se establece un plazo temporal de manifestación entre seis (6) meses y cinco (5) años.

Atributos	Definición	Calificación	Ponderación
Reversibilidad (RV)	Capacidad del bien de protección ambiental afectado de volver a sus condiciones anteriores a la afectación por medios naturales, una vez se haya dejado de actuar sobre el ambiente.	Cuando la alteración puede ser asimilada por el entorno de forma medible en un periodo menor de 1 año.	1
		Aquel en el que la alteración puede ser asimilada por el entorno de forma medible en el mediano plazo, debido al funcionamiento de los procesos naturales de la sucesión ecológica y de los mecanismos de autodepuración del medio.	3

		Es decir, entre uno (1) y diez (10) años.	
		Cuando la afectación es permanente o se supone la imposibilidad o dificultad extrema de retornar, por medios naturales, a sus condiciones anteriores. Corresponde a un plazo superior a diez (10) años.	5
		RV	1

El valor de la reversibilidad se pondera en 1 ya que la alteración puede ser asimilada por el entorno de forma medible en un periodo menor de 1 año.

Atributos	Definición	Calificación	Ponderación
Recuperabilidad (MC)	Capacidad de recuperación del bien de protección por medio de la implementación de medidas de gestión ambiental.	Si se logra en un plazo inferior a seis (6) meses.	1
		Caso en que la afectación puede eliminarse por la acción humana, al establecerse las oportunas medidas correctivas, y así mismo, aquel en el que la alteración que sucede puede ser compensable en un periodo comprendido entre 6 meses y 5 años.	3
		Caso en que la alteración del medio o pérdida que supone es imposible de reparar, tanto por la acción natural como por la acción humana.	10
		MC	1

La recuperabilidad se pondera en 1 debido a que la afectación puede eliminarse en un plazo inferior a seis (6) meses.

(I) = (3*IN)+(2*EX)+PE+RV+MC

(I) = (3*1)+(2*1)+3+1+1

(I) = 10

*La importancia de la afectación se encuentra en el rango 9-20 es decir una medida cualitativa de impacto **LEVE.***

Teniendo en cuenta que el Municipio de San Antero, por no contar con el permiso de vertimientos al sistema de tratamiento de aguas residuales del Municipio y por consiguiente estar realizando vertimiento ilegal, se podría generar afectación a los recursos naturales, el grado de afectación ambiental se determinó por medio de la evaluación de riesgo como se describe a continuación:

Determinación del riesgo:

Probabilidad de Ocurrencia (o):

Para determinar la probabilidad de ocurrencia de la afectación, el equipo de profesionales de la autoridad ambiental debe evaluar y sustentar la posibilidad de que ocurra y de acuerdo con la experticia, se debe clasificar de acuerdo a la siguiente tabla:

Probabilidad de Ocurrencia	
Criterio	Valor de probabilidad de ocurrencia
Muy alta	1
Alta	0.8
Moderada	0.6
Baja	0.4
Muy baja	0.2

*Para lo cual se tomó el valor de **0,2** para una probabilidad de ocurrencia Muy Baja, teniendo en cuenta que el cumplimiento depende del compromiso de la entidad, y puede evitar incurrir nuevamente en la infracción que puede representar una afectación ambiental.*

Magnitud Potencial de la afectación (m):

La magnitud o nivel potencial de la afectación se puede calificar como irrelevante, leve, moderado, severo o crítico, de acuerdo a la valoración de la importancia de la afectación, como se muestra en la siguiente tabla:

Criterio de valoración de afectación	Importancia de la afectación	Nivel potencial de impacto
Irrelevante	8	20
Leve	9-20	35
Moderado	21-40	50
Severo	41-60	65
Crítico	61-80	80

*De acuerdo a la importancia de la afectación calculada anteriormente en 10 la magnitud potencial de impacto se determina en 35 es decir **LEVE.***

Teniendo definido el nivel potencial de impacto y la probabilidad de ocurrencia se procede a establecer el nivel de riesgo a partir del producto de las variables:

$$r = o \times m$$

Donde;

r= Riesgo

o= probabilidad de ocurrencia de la afectación

m= Magnitud potencial de la afectación

$$r = o \times m$$

r = 0,2 x35

r = 7

De acuerdo a la siguiente tabla:

Probabilidad / Afectación	Irrelevante	Leve	Moderado	Severo	Crítico
Muy alta [1]	20	35	50	65	80
Alta [0.8]	16	28	40	52	64
Moderada [0.6]	12	21	30	39	48
Baja [0.4]	8	14	20	26	32
Muy baja [0.2]	4	7	10	13	16

La valoración del riesgo se establece ***en 7 es decir, como LEVE.***

Una vez se realiza la valoración del riesgo se procede, a monetizar mediante la siguiente relación:

R= (11,03 x SMMLV) x (I)

En donde:

R= *Valor monetario de la importancia del riesgo*

SMMLV: *Salario Mínimo Mensual Legal Vigente (pesos)*

I= *Importancia de la Afectación.*

Reemplazando en la formula los valores

R= (11,03 x $1.300.000) x (7)

R= $100.373.000, oo

El Valor monetario de la importancia de la Afectación al reemplazar en la formula los valores correspondientes, dio como resultado la suma de: ***CIEN MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y TRES MIL PESOS MONEDA LEGAL COLOMBIANA ($100.373.000, oo).***

❖ ***Circunstancias Agravantes y Atenuantes (A)***

Las circunstancias atenuantes y agravantes son factores que están asociados al comportamiento del infractor.

La Ley 1333 de 2009 – modificada por la Ley 2387 de 2024, ***"POR MEDIO DEL CUAL SE MODIFICA EL PROCEDIMIENTO SANCIONATORIO AMBIENTAL, LEY 1333 DE 2009, CON***

EL PROPÓSITO DE OTORGAR HERRAMIENTAS EFECTIVAS PARA PREVENIR Y SANCIONAR A LOS INFRACTORES Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES"

De la determinación de estas circunstancias, hacen parte los antecedentes y pronunciamientos previos de las autoridades ambientales en relación con el tema, así como las evidencias recogidas durante el seguimiento que se realiza al cumplimiento de las obligaciones y, las conductas atribuibles a los infractores.

Para este caso concreto, el Municipio de San Antero, no ha incurrido en agravantes.

Por la anterior se concluye que:

***A=** 0*

- ***Costos Asociados (Ca)***

La variable costos asociados, corresponde a aquellas erogaciones en las cuales incurre la autoridad ambiental durante el proceso sancionatorio y que son responsabilidad del infractor. Estos costos son diferentes aquellos que le son atribuibles a la autoridad ambiental en ejercicio de la función policiva que le establece la Ley 1333 de 2009, modificada por la Ley 2387 de 2024, y en el deber constitucional de prevenir, controlar y sancionar es decir, los gastos que ocasione la práctica de una prueba serán a cargo de quien la solicite. (Manual conceptual y procedimental, Metodología para el cálculo de multas por infracción a la normatividad ambiental))

Para este cálculo de multa al Municipio de San Antero, no se ha incurrido en Costos Asociados, por lo que:

***Ca**= 0*

- ***Capacidad Socioeconómica del Infractor (Cs)***

Teniendo en cuenta la consulta realizada en el resumen de categorías de la Contaduría General de la Nación 2022, se puede establecer que el Municipio de San Antero se encuentra calificado como un Municipio de Sexta categoría, razón por la cual tomamos como referencia la siguiente tabla:

Tabla 19. Categoría vs capacidad socioeconómica de los municipios

Para Municipios	
Categoría	Factor ponderador - Capacidad de pago
Especial	1
Primera	0.9
Segunda	0.8
Tercera	0.7
Cuarta	0.6
Quinta	0.5
Sexta	0.4

La Ponderación se sitúa en 0,4

TASACIÓN MULTA

Luego de realizado el cálculo de todas las variables que podrían intervenir en la tasación de la Multa a imponer al infractor responsable Municipio de San Antero, por no contar con el permiso de vertimientos al sistema de tratamiento de aguas residuales del Municipio y por consiguiente estar realizando vertimiento ilegal, con lo anterior de vulnera lo establecido en el decreto 1076 de 2.015; se presenta a continuación la Tabla resumen y el Monto aproximado a imponer como multa al infractor una vez sea determinada completamente su responsabilidad en las actividades ilegales evaluadas.

El Monto Total de la Multa se determina mediante la aplicación de la siguiente formula una vez que se cuenta con los valores de todas las variables evaluadas en el presente documento:

$$Multa = B + [(\alpha * i) * (1 + A) + Ca] * Cs$$

Donde:

B:	Beneficio ilícito	A:	Circunstancias agravantes y atenuantes
α:	Factor de temporalidad	Ca:	Costos asociados
i:	Grado de afectación ambiental y/o evaluación del riesgo	Cs:	Capacidad socioeconómica del infractor.

VALOR DE MULTA:

B: $10.900.000,oo

α: 1,00

A: 0

i: $ 100.373.000,oo

Ca: 0

Cs: 0,4

MULTA*= $10.900.000,oo + [(1,00 *$100.373.000,oo)*(1+ 0)+0]*0,4*

MULTA=$51.049.200,oo

En la siguiente tabla se presenta el resumen de todos los valores calculados y se determina el Monto Total de la Multa a Imponer.

Tabla resumen Calculo Multa Municipio de San Antero

ATRIBUTOS EVALUADOS		VALORES CALCULADOS
BENEFICIO ILÍCITO	Ingresos Directos	$0
	Costos Evitados	$ 10.900.000,oo
	Ahorros de Retrasos	0

	Capacidad de Detección	0,5
TOTAL BENEFICIO ILÍCITO		$ 10.900.000,oo

AFECTACIÓN AMBIENTAL	Intensidad (IN)	1
	Extensión (EX)	1
	Persistencia (PE)	3
	Reversibilidad (RV)	1
	Recuperabilidad (MC)	1
	Importancia (I)	10
	SMMLV	$1.300.000
	Factor de Monetización	11,03
TOTAL MONETIZACIÓN AFECTACIÓN AMBIENTAL		$ 100.373.000,oo

FACTOR DE TEMPORALIDAD	Periodo de Afectación (Días)	1
	FACTOR ALFA (TEMPORALIDAD)	1,00

AGRAVANTES Y ATENUANTES	Factores Atenuantes	0
	Factores Agravantes	0
TOTAL AGRAVANTES Y ATENUANTES		0

COSTOS ASOCIADOS	Trasporte, Seguros, Almacén, etc.	$ 0
	Otros	$0
TOTAL COSTOS ASOCIADOS		$0

CAPACIDAD SOCIOECONÓMICA	Ente Territorial	Sexta Categoría
	Valor Ponderación CS	0,4

MONTO TOTAL CALCULADO MULTA	$51.049.200,oo

El monto total calculado a imponer al infractor Municipio de San Antero, por no contar con el permiso de vertimientos al sistema de tratamiento de aguas residuales del Municipio y por consiguiente estar realizando vertimiento ilegal, con lo anterior de vulnera lo establecido en el decreto 1076 de 2.015, seria de ***CINCUENTA Y UN MILLONES CUARENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS PESOS MONEDA LEGAL COLOMBIANA ($51.049.200, oo)".***

De igual manera, la Corporación Autónoma Regional de los Valles del Sinú y del San Jorge – CVS, con relación a la tasación de la multa en el caso concreto, la Corporación a través de funcionarios competentes de la División de Calidad Ambiental emitieron **CONCEPTO TÉCNICO** CT-2024-1544 **de fecha 18 de noviembre de 2024**, por el cual se hace el cálculo de multa ambiental a la empresa **AQUALIA LATINOAMÉRICA S.A. E.S.P.,** representado legalmente por el señor alcalde JOSÉ RAMON DIEZ.CABALLERO y/o quien haga sus veces, el cual expresa lo siguiente:

"CONCEPTO TÉCNICO CT-2024-1544

De acuerdo a lo descrito en el informe de visita ASA 2020 – 649, presentado por profesionales adscritos a La Subdirección de Gestión Ambiental de la CVS, a las pruebas expuestas en los mismos y tomando como base el MANUAL CONCEPTUAL Y PROCEDIMENTAL DE LA METODOLOGÍA PARA EL CALCULO DE MULTAS POR INFRACCIÓN A LA NORMATIVIDADAMBIENTAL del MADS, se procedió a realizar la Tasación de la Multa Económica a la que debe hacerse acreedor el posible infractor una vez determinada su responsabilidad en las afectaciones realizadas a los Recursos Naturales y el Ambiente, y conforme al concepto que emita la Unidad de Jurídica Ambiental teniendo en cuenta que la multa es una sanción que debe actuar como un disuasivo del comportamiento, buscando reducir los incentivos a no cumplir con las normas y las reglas establecidas. Dicho valor se calculó basado en los siguientes preceptos:

$$\text{Multa} = B + [(\alpha * i)(1 + A) + Ca] * Cs$$

En donde:

***B**: Beneficio ilícito*

***α**: Factor de temporalidad*

***A**: Circunstancias agravantes y atenuantes*

***i**: Grado de afectación ambiental*

***Ca**: Costos asociados*

***Cs**: Capacidad socioeconómica del infractor y/o evaluación del riesgo*

CÁLCULO Y ASIGNACIÓN DE VALORES A LAS VARIABLES

❖ ***Beneficio Ilícito (B)***

- *El cálculo de la variable **BENEFICIO ILÍCITO** tomándolo como la ganancia económica que podría obtener el infractor fruto de su conducta se determinó teniendo en cuenta los **Ingresos Directos** los **Costos Evitados** (ahorro económico o ganancia percibida por el infractor al incumplir o evitar las inversiones exigidas por la norma ambiental y/o los actos administrativos) y los **Ahorros de Retraso** (Referidos especialmente a la rentabilidad que percibiría la inversión que se deja de realizar al infringir la norma) y el cálculo de la Capacidad de Detección de la Conducta por parte de la Autoridad Ambiental.*

- *El Beneficio Ilícito se determina conforme a la siguiente ecuación:*

$$B = \frac{y \times (1 - p)}{p}$$

Dónde: B = Beneficio Ilícito

y = Sumatoria de Ingresos directos, Costos Evitados y Ahorro de Retraso

p = Capacidad de detección de la Autoridad Ambiental

Por lo tanto:

*A. Realmente el cálculo de los **Ingresos Directos** para este evento no puede tasarse debido a que la Empresa Aqualia Latinoamérica S.A. E.S.P., por el hecho ilícito no recibió de forma efectiva el ingreso de un recurso, por esta razón no se determina valor monetario.*

*B. Para el cálculo de los **Costos Evitados**, se tiene en cuenta los recursos que la Empresa Aqualia Latinoamérica S.A. E.S.P. debió invertir para contar con el permiso de vertimientos al sistema de tratamiento de aguas residuales del Municipio y no estar realizando vertimiento ilegal, actividades que tienen un costo aproximado Diez Millones Novecientos Mil Pesos Moneda Legal Colombiana ($10.900.000, oo).*

*C. Para el presente ejercicio no es posible determinar el **Ahorro por Retraso**, debido a que el presunto infractor no cumplió con la norma ambiental ni con las actividades e inversiones que de esta dependían, razón por la cual no hubo retrasos de la que se pudiera determinar una utilidad por parte del infractor. En tal sentido el Ahorro por Retraso se determina como **CERO ($0)**.*

- ***Capacidad de Detección de la Conducta:** Teniendo en cuenta que el hecho ilícito es realizado por la Empresa Aqualia Latinoamérica S.A. E.S.P., por no contar con el permiso de vertimientos al sistema de tratamiento de aguas residuales del Municipio y por consiguiente estar*

*realizando vertimiento ilegal, al cual la corporación ha venido realizando seguimiento permanente, por lo cual se puede decir que la capacidad de detección es Alta y por ende se le asigna un valor de **CERO PUNTO CINCO (0.5)**.*

- *Una vez calculadas todas las variables posibles finalmente se determina el Valor del **BENEFICIO ILÍCITO** mediante la fórmula incluida al inicio de este documento.*

$$B = \frac{y \times (1 - p)}{p}$$

(y1)	*Ingresos directos*	*0*		
(y2)	*Costos evitados*	*$ 10.900.000*		
(y3)	*Ahorros de retraso*	*0*	*$ 10.900.000*	***= Y***
(p)	*Capacidad de detecció de la conducta*	*Baja = 0,40*		
		Media = 0,45		
		Alta = 0,50	***0,5***	***= p***
B =	***$ 10.900.000,oo***			

- *El valor calculado del **BENEFICIO ILÍCITO** por parte de la Empresa Aqualia Latinoamérica S.A. E.S.P., por no contar con el permiso de vertimientos al sistema de tratamiento de aguas residuales del Municipio y por consiguiente estar realizando vertimiento ilegal, es de **DIEZ MILLONES NOVECIENTOS MIL PESOS MONEDA LEGAL COLOMBIANA ($10.900.000,oo).***

❖ ***Factor de Temporalidad (α)***

Factor d temporalidad	*Número de días continuos o discontinuos durante lo cuales sucede el ilícito (Entre 1 y 365)*	***1***
	α = (3/364)*d+(1-(3/364)	***1,00***

❖ ***Valoración de la importancia de la afectación (i)***

$$I = (3IN) + (2EX) + PE + RV + MC$$

Para la valoración de la importancia de la afectación se emplean los siguientes atributos:

- *Intensidad (IN)*

- *Extensión (EX)*
- *Persistencia (PE)*
- *Reversibilidad (RV)*
- *Recuperabilidad (MC)*

AFECTACIÓN AMBIENTAL

- Grado de afectación ambiental:
Para la estimación de esta variable se estimó la importancia de la afectación mediante la calificación de cada uno de los atributos, atendiendo a los criterios y valores determinados en la Resolución No. 2086 del MAVDT, en el Manual Conceptual y Procedimental de la Metodología para el Cálculo de Multas por Infracción a la Normatividad Ambiental, y basándose en la evaluación de las pruebas recogidas y la visita realizada al lugar de afectación. Los atributos evaluados y su ponderación, luego de realizada la matriz de interacción medio – acción se pueden identificar como sigue:

Atributos	Definición	Calificación	Ponderación
Intensidad (IN)	Define el grado de incidencia de la acción sobre el bien de protección	Afectación de bien de protección representada en una desviación del estándar fijado por la norma y comprendida en el rango entre 0 y 33%.	1
		Afectación de bien de protección representada en una desviación del estándar fijado por la norma y comprendida en el rango entre 34% y 66%.	4
		Afectación de bien de protección representada en una desviación del estándar fijado por la norma y comprendida en el rango entre 67% y 99%.	8
		Afectación de bien de protección representada en una desviación del estándar fijado por la norma igual o superior o al 100%	12
		IN	1

El valor de la Intensidad se pondera en 1 debido a que la Afectación de bien de protección representada en una desviación del estándar fijado por la norma y comprendida en el rango entre 0% y 33%.

Atributos	Definición	Calificación	Ponderación
Extensión (EX)	Se refiere al área de influencia del impacto en relación con el entorno	Cuando la afectación puede determinarse en un área localizada e inferior a una (1) hectárea.	1
		Cuando la afectación incide en un área determinada entre una (1) hectárea y cinco (5) hectáreas	4
		Cuando la afectación se manifiesta en un área superior a cinco (5) hectáreas.	12
		EX	1

El valor de la extensión se pondera en 1 debido a que la afectación puede determinarse en un área localizada e inferior a una (1) hectárea.

Atributos	Definición	Calificación	Ponderación
Persistencia (PE)	Se refiere al tiempo que permanecería el efecto desde su aparición y hasta que el bien de protección retorne a las condiciones previas a la acción	Si la duración del efecto es inferior a seis (6) meses.	1
		Cuando la afectación no es permanente en el tiempo, se establece un plazo temporal de manifestación entre seis (6) meses y cinco (5) años.	3
		Cuando el efecto supone una alteración, indefinida en el tiempo, de los bienes de protección o cuando la alteración es superior a 5 años.	5
		PE	3

El valor de la persistencia se pondera en 3 ya que la afectación no es permanente en el tiempo, se establece un plazo temporal de manifestación entre seis (6) meses y cinco (5) años.

Atributos	Definición	Calificación	Ponderación
Reversibilidad (RV)	Capacidad del bien de protección ambiental afectado de volver a sus condiciones anteriores a la afectación por medios naturales, una vez se haya dejado de actuar sobre el ambiente.	Cuando la alteración puede ser asimilada por el entorno de forma medible en un periodo menor de 1 año.	1
		Aquel en el que la alteración puede ser asimilada por el entorno de forma medible en el mediano plazo, debido al funcionamiento de los procesos naturales de la sucesión ecológica y de los mecanismos de autodepuración del medio. Es decir, entre uno (1) y diez (10) años.	3
		Cuando la afectación es permanente o se supone la imposibilidad o dificultad extrema de retornar, por medios naturales, a sus condiciones anteriores. Corresponde a un plazo superior a diez (10) años.	5
		RV	1

El valor de la reversibilidad se pondera en 1 ya que la alteración puede ser asimilada por el entorno de forma medible en un periodo menor de 1 año.

Atributos	Definición	Calificación	Ponderación
Recuperabilidad (MC)	Capacidad de recuperación del bien de protección por medio de la implementación de medidas de gestión ambiental.	Si se logra en un plazo inferior a seis (6) meses.	1
		Caso en que la afectación puede eliminarse por la acción humana, al establecerse las oportunas medidas correctivas, y así mismo,	3

		aquel en el que la alteración que sucede puede ser compensable en un periodo comprendido entre 6 meses y 5 años.	
		Caso en que la alteración del medio o pérdida que supone es imposible de reparar, tanto por la acción natural como por la acción humana.	10
		MC	1

La recuperabilidad se pondera en 1 debido a que la afectación puede eliminarse en un plazo inferior a seis (6) meses.

(I) = (3*IN)+(2*EX)+PE+RV+MC

(I) = (3*1)+(2*1)+3+1+1

(I) = 10

La importancia de la afectación se encuentra en el rango 9-20 es decir una medida cualitativa de impacto ***LEVE.***

Teniendo en cuenta que la empresa Aqualia Latinoamérica S.A. E.S.P., por no contar con el permiso de vertimientos al sistema de tratamiento de aguas residuales del Municipio y por consiguiente estar realizando vertimiento ilegal, se podría generar afectación a los recursos naturales, el grado de afectación ambiental se determinó por medio de la evaluación de riesgo como se describe a continuación:

Determinación del riesgo:

Probabilidad de Ocurrencia (o):

Para determinar la probabilidad de ocurrencia de la afectación, el equipo de profesionales de la autoridad ambiental debe evaluar y sustentar la posibilidad de que ocurra y de acuerdo con la experticia, se debe clasificar de acuerdo con la siguiente tabla:

Probabilidad de Ocurrencia	
Criterio	Valor de probabilidad de ocurrencia
Muy alta	1
Alta	0.8
Moderada	0.6
Baja	0.4
Muy baja	0.2

Para lo cual se tomó el valor de ***0,2*** *para una probabilidad de ocurrencia Muy Baja, teniendo en cuenta que el cumplimiento depende del compromiso de la entidad, y puede evitar incurrir nuevamente en la infracción que puede representar una afectación ambiental.*

Magnitud Potencial de la afectación (m):

La magnitud o nivel potencial de la afectación se puede calificar como irrelevante, leve, moderado, severo o crítico, de acuerdo con la valoración de la importancia de la afectación, como se muestra en la siguiente tabla:

Criterio de valoración de afectación	Importancia de la afectación	Nivel potencial de impacto
Irrelevante	8	20
Leve	9-20	35
Moderado	21-40	50
Severo	41-60	65
Crítico	61-80	80

De acuerdo a la importancia de la afectación calculada anteriormente en 10 la magnitud potencial de impacto se determina en 35 es decir ***LEVE.***

Teniendo definido el nivel potencial de impacto y la probabilidad de ocurrencia se procede a establecer el nivel de riesgo a partir del producto de las variables:

$$r = o \times m$$

Donde;

r= Riesgo

o= probabilidad de ocurrencia de la afectación

m= Magnitud potencial de la afectación

$$r = o \times m$$

r = 0,2 x35

r = 7

De acuerdo a la siguiente tabla:

Probabilidad / Afectación	Irrelevante	Leve	Moderado	Severo	Crítico
Muy alta [1]	20	35	50	65	80
Alta [0.8]	16	28	40	52	64
Moderada [0.6]	12	21	30	39	48
Baja [0.4]	8	14	20	26	32
Muy baja [0.2]	4	7	10	13	16

La valoración del riesgo se establece ***en 7 es decir, como LEVE.***

Una vez se realiza la valoración del riesgo se procede, a monetizar mediante la siguiente relación:

R= (11,03 x SMMLV) x (I)

En donde:

R= *Valor monetario de la importancia del riesgo*

SMMLV: *Salario Mínimo Mensual Legal Vigente (pesos)*

I= *Importancia de la Afectación.*

Reemplazando en la formula los valores

R= (11,03 x $1.300.000) x (7)

R= $100.373.000, oo

El Valor monetario de la importancia de la Afectación al reemplazar en la formula los valores correspondientes, dio como resultado la suma de: ***CIEN MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y TRES MIL PESOS MONEDA LEGAL COLOMBIANA ($100.373.000, oo).***

❖ ***Circunstancias Agravantes y Atenuantes (A)***

Las circunstancias atenuantes y agravantes son factores que están asociados al comportamiento del infractor.

La Ley 1333 de 2009 –modificada por la Ley 2387 de 2024, ***"POR MEDIO DEL CUAL SE MODIFICA EL PROCEDIMIENTO SANCIONATORIO AMBIENTAL, LEY 1333 DE 2009, CON EL PROPÓSITO DE OTORGAR HERRAMIENTAS EFECTIVAS PARA PREVENIR Y SANCIONAR A LOS INFRACTORES Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES"****.*

De la determinación de estas circunstancias, hacen parte los antecedentes y pronunciamientos previos de las autoridades ambientales en relación con el tema, así como las evidencias recogidas durante el seguimiento que se realiza al cumplimiento de las obligaciones y, las conductas atribuibles a los infractores.

Para este caso concreto, la empresa Aqualia Latinoamérica S.A. E.S.P., no ha incurrido en agravantes.

Por la anterior se concluye que:

A= *0*

❖ ***Costos Asociados (Ca)***

La variable costos asociados, corresponde a aquellas erogaciones en las cuales incurre la autoridad ambiental durante el proceso sancionatorio y que son responsabilidad del infractor. Estos costos son diferentes aquellos que le son atribuibles a la autoridad ambiental en ejercicio de la función policiva que le establece la Ley 1333 de 2009 y en el deber constitucional de prevenir, controlar y sancionar, es decir, los gastos que ocasione la práctica de una prueba serán a cargo de quien la solicite. (Manual conceptual y procedimental, Metodología para el cálculo de multas por infracción a la normatividad ambiental))

Para este cálculo de multa, la empresa Aqualia Latinoamérica S.A. E.S.P., no ha incurrido en Costos Asociados, por lo que:

***Ca**= 0*

❖ ***Capacidad Socioeconómica del Infractor (Cs)***

Teniendo en cuenta el Certificado de Existencia y Representación Legal Presentado por la empresa Aqualia Latinoamérica S.A. E.S.P., se puede establecer que el tamaño de la empresa es: Grande.

Tamaño de la Empresa	Factor de ponderación
Microempresa	0.25
Pequeña	0.5
Mediana	0.75
Grande	1.0

La Ponderación se sitúa en 1.

TASACIÓN MULTA

Luego de realizado el cálculo de todas las variables que podrían intervenir en la tasación de la Multa a imponer al infractor responsable empresa Aqualia Latinoamérica S.A. E.S.P., por no contar con el permiso de vertimientos al sistema de tratamiento de aguas residuales del Municipio y por consiguiente estar realizando vertimiento ilegal, con lo anterior de vulnera lo establecido en el decreto 1076 de 2.015; se presenta a continuación la Tabla resumen y el Monto aproximado a imponer como multa al infractor una vez sea determinada completamente su responsabilidad en las actividades ilegales evaluadas.

El Monto Total de la Multa se determina mediante la aplicación de la siguiente formula una vez que se cuenta con los valores de todas las variables evaluadas en el presente documento:

$$Multa = B + [(\alpha * i) * (1 + A) + Ca] * Cs$$

Donde:

B:	Beneficio ilícito	A:	Circunstancias agravantes y atenuantes
α:	Factor de temporalidad	Ca:	Costos asociados
i:	Grado de afectación ambiental y/o evaluación del riesgo	Cs:	Capacidad socioeconómica del infractor.

VALOR DE MULTA:

B: $10.900.000,oo

α: 1,00

A: 0

i: $ 100.373.000,oo

Ca: 0

Cs: 1

MULTA*= $10.900.000,oo + [(1,00 *$100.373.000,oo)*(1+ 0)+0]*1*
***MULTA*=$111.273.000, oo**

En la siguiente tabla se presenta el resumen de todos los valores calculados y se determina el Monto Total de la Multa a Imponer.

Tabla resumen Calculo Multa empresa Aqualia Latinoamérica S.A. E.S.P.

ATRIBUTOS EVALUADOS		*VALORES CALCULADOS*
BENEFICIO ILÍCITO	*Ingresos Directos*	*$0*
	Costos Evitados	*$ 10.900.000,oo*
	Ahorros de Retrasos	*$0*
	Capacidad de Detección	*0,5*
TOTAL BENEFICIO ILÍCITO		*$ 10.900.000,oo*

AFECTACIÓN AMBIENTAL	*Intensidad (IN)*	*1*
	Extensión (EX)	*1*
	Persistencia (PE)	*3*
	Reversibilidad (RV)	*1*
	Recuperabilidad (MC)	*1*
	Importancia (I)	*10*
	SMMLV	*$1.300.000*
	Factor de Monetización	*11,03*
TOTAL MONETIZACIÓN AFECTACIÓN AMBIENTAL		*$ 100.373.000,oo*

FACTOR DE TEMPORALIDAD	*Periodo de Afectación (Días)*	*1*
	FACTOR ALFA (TEMPORALIDAD)	*1,00*

AGRAVANTES Y ATENUANTES	*Factores Atenuantes*	*0*
	Factores Agravantes	*0*
TOTAL AGRAVANTES Y ATENUANTES		*0*

COSTOS ASOCIADOS	*Trasporte, Seguros, Almacén, etc.*	*$ 0*
	Otros	*$0*
TOTAL COSTOS ASOCIADOS		*$0*

CAPACIDAD SOCIOECONÓMICA	*Persona Jurídica*	*Grande*
	Valor Ponderación CS	*1*

MONTO TOTAL CALCULADO MULTA	*$111.273.000,oo*

El monto total calculado a imponer al infractor empresa Aqualia Latinoamérica S.A. E.S.P., por no contar con el permiso de vertimientos al sistema de tratamiento de aguas residuales del Municipio y por consiguiente estar realizando vertimiento ilegal, con lo anterior se vulnera lo establecido en el decreto 1076 de 2.015, seria de ***CIENTO ONCE MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y TRES MIL PESOS MONEDA LEGAL COLOMBIANA ($111.273.000, oo).***

En mérito de lo anterior, esta Corporación,

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese responsable al **MUNICIPIO DE SAN ANTERO**, representado legalmente por el señor alcalde DENNYS CHICA FUENTES y/o quien hiciera sus veces, y contra la empresa **AQUALIA LATINOAMÉRICA S.A. E.S.P.,** representada legalmente por el señor JOSÉ RAMON DIEZ CABALLERO y/o quien haga sus veces, de los cargos formulados mediante Auto N° 12839 de 18 de enero de 2022, por las razones que se explican ampliamente en los considerandos de la presente Resolución.

ARTÍCULO SEGUNDO: Sancionar al **MUNICIPIO DE SAN ANTERO**, representado legalmente por el señor alcalde DENNYS CHICA FUENTES y/o quien hiciera sus veces, con multa correspondiente a la suma de **CINCUENTA Y UN MILLONES CUARENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS PESOS MONEDA LEGAL COLOMBIANA ($51.049.200,oo),** por las razones anteriormente expuestas.

ARTÍCULO TERCERO: Sancionar a la empresa **AQUALIA LATINOAMÉRICA S.A. E.S.P.,** representada legalmente por el señor JOSÉ RAMON DIEZ.CABALLERO y/o quien haga sus veces, con multa correspondiente a la suma de ***CIENTO ONCE MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y TRES MIL PESOS MONEDA LEGAL COLOMBIANA ($111.273.000,oo*)**, por las razones anteriormente expuestas.

ARTÍCULO CUARTO: El valor de la multa, debe ser cancelado en la Cuenta Corriente No. 890-04387-0, Banco de Occidente, a nombre de la Corporación Autónoma Regional de los Valles del Sinú y del San Jorge, dentro de los cinco (5) días siguientes a la ejecutoria de la presente resolución.

PARÁGRAFO PRIMERO: Una vez efectuado el pago exigido en el presente artículo se debe allegar constancia de este a la Oficina Jurídica Ambiental de la Corporación, con destino al expediente que para tal fin se lleva en esta dependencia.

PARÁGRAFO SEGUNDO: La presente Resolución presta mérito ejecutivo, conforme lo estable el artículo 42 de la ley 1333 de 2009, una vez esté en firme pasará a la oficina Jurídica Coactiva de la CVS.

ARTÍCULO QUINTO: Notificar en debida forma el contenido de la presente Resolución al **MUNICIPIO DE SAN ANTERO**, representado legalmente por el señor alcalde DENNYS CHICA FUENTES y/o quien hiciera sus veces, y contra la empresa **AQUALIA LATINOAMÉRICA S.A. E.S.P.,** representada legalmente por el señor JOSÉ RAMON DIEZ CABALLERO y/o quien haga sus veces, de conformidad con la Ley 1333 de 2009, artículo 19.

PARÁGRAFO: De no ser posible la notificación personal se procederá a la notificación por aviso según las normas de la Ley 1437 de 2011.

ARTÍCULO SEXTO: Ordenar la inscripción del **MUNICIPIO DE SAN ANTERO**, representado legalmente por el señor alcalde DENNYS CHICA FUENTES y/o quien hiciera sus veces, y contra la empresa **AQUALIA LATINOAMÉRICA S.A. E.S.P.,** representada legalmente por el señor JOSÉ RAMON DIEZ.CABALLERO y/o quien haga sus veces, en el Registro Único de Infractores Ambientales (RUIA), como prueba de reincidencia en sanciones ambientales de conformidad con lo establecido en el Artículo 58 de la Ley 1333 de 2009

ARTÍCULO SÉPTIMO: Comunicar la presente decisión a la Procuraduría Judicial Agraria y Ambiental de Córdoba para su conocimiento y fines pertinentes en atención a lo preceptuado en el artículo 56 inciso final de la Ley 1333 de 2009.

ARTÍCULO OCTAVO: Contra la presente Resolución procede el recurso de reposición, el cual podrá ser interpuesto personalmente por el interesado, su representante o apoderado debidamente constituido ante el Director General de esta Corporación dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a su notificación, conforme lo dispuesto en la Ley 1437 de 2011.

ARTÍCULO NOVENO: La presente resolución rige a partir de la fecha de su ejecutoria

COMUNÍQUESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE



ORLANDO RODRIGO MEDINA MARSIGLIA
DIRECTOR GENERAL-CVS

Proyectó: Andrea Sebá Calle/ Abogada Oficina Jurídica Ambiental
Revisó: Ángel Palomino H. / Coordinador Oficina Jurídica
Revisó: César Otero Flórez /Secretario General
Revisó: Cindy Páez /Profesional U. Distrital